

**-000191-**

*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Guatemala, julio de 2007

Licenciada  
Ana Isabel Antillón  
Directora Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho

Señora Directora,

Atentamente, me permito adjuntar en formato documental y digital, el Dictamen con Registros, **3625** "Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-."

Sin otro particular me suscribo, atentamente

  
**Zury Ríos-Montt de Weller**  
**Presidenta**

*Blanca Hernández Molina*  
*Firma Responsable*  
*Secretaria*



18 JUL 2007  
16:49  
a. a. f. m. h.

*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

18 JUL 2007

Guatemala

**D I C T A M E N**  
**INICIATIVA 3625**

**HONORABLE PLENO**

La Comisión de Relaciones Exteriores de este alto Organismo, recibió por conducto de la Dirección Legislativa y por disposición del Pleno de Congreso, el expediente número 3625, relacionado con "Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, expediente sobre el que, una vez analizado, deberá emitir dictamen sobre la conveniencia de su adopción o no y ponerlo en conocimiento del Honorable Pleno.

La Comisión ha realizado un exhaustivo estudio del expediente remitido a su consideración y recabado diferentes opiniones de sus propios miembros y de asesores, para poder en observancia de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, cumplir a cabalidad la función contenida en el artículo 27, que indica la naturaleza y funciones de las Comisiones establecidas para el mejor cumplimiento de las funciones del Congreso y que constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el Pleno.



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

**CONSIDERACIONES PRELIMINARES:**

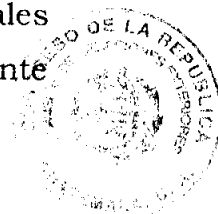
El abordaje del análisis de un tema como el establecimiento de una Comisión en Guatemala, cuyo objetivo fundamental sea el combate a la impunidad, es no sólo insoslayable sino un tema en el cual debe involucrarse la totalidad de la ciudadanía, dado que es un tema no sólo actual, sino absolutamente innegable en una sociedad inmersa dentro de una problemática social, política y económica, con matices trágicos, dada no sólo la estructura tradicional prevaleciente, sino el clima de exclusión y negación de la justicia y la falta efectiva de un verdadero estado Constitucional de derecho.

No obstante, el análisis del contenido del Acuerdo suscrito por el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, no debe verse únicamente desde esa perspectiva, sino necesariamente dentro del marco institucional y constitucional vigente, de ahí que el análisis de esa Comisión deberá hacerse tomando en consideración estos aspectos.

**CONTENIDO BASICO DEL ACUERDO:**

El Acuerdo afirma de conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado, la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para la protección de los derechos humanos, fortaleciendo esos derechos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.

Afirma la parte considerativa del Acuerdo que, los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, atentan gravemente



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación y la condena, todo lo cual conduce, según afirma, al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del País.

El Acuerdo fue suscrito en el marco del Acuerdo Global de Derechos Humanos del 22 de marzo de 1994, y para combatir, según su propia justificación, los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad con el propósito de que éstos ya no existan, asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos. Como consecuencia de todo lo anterior, estima que se hace necesaria la implementación de un Acuerdo de carácter internacional en materia de Derechos Humanos que cree mecanismos efectivos de combate a la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.

Como consecuencia de lo anterior, se buscó la firma de un Acuerdo por el cual se estableciera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, y según su justificación, reforzar la capacidad del



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

Estado para cumplir eficazmente las obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de las que es parte.

**OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL ACUERDO:**

Los objetivos delineados en el Acuerdo, son los siguientes:

1. Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
2. Crear los mecanismos y procedimientos necesarios que deban implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas.
3. Para efectos del Acuerdo, se entiende como cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, aquellos grupos que reúnan las siguientes características:
  - a. Cometan acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos.
  - b. Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

**FUNCIONES DE LA COMISION.**

Las principales funciones de la Comisión según el Acuerdo suscrito, son:

1. Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado.
2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
3. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias.

**PRINCIPALES FACULTADES DE LA COMISION.**

Las principales facultades de la comisión son:

1. Promover la persecución penal por medio de la denuncia ante las autoridades correspondientes.
2. Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal por los delitos cometidos por presuntos integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad.

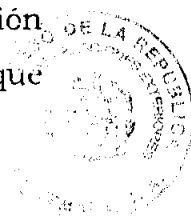


*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

3. Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas.
4. Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios administrativos mencionados anteriormente.
5. Solicitar informes, declaraciones, documentos y colaboración en general de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas.
6. Solicitar al Ministerio Público y al Gobierno la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación, así como monitorear el cumplimiento de las medidas.
7. Dentro de su capacidad legal, iniciar procedimientos judiciales y concertar Acuerdos con otros Estados y Organizaciones Internacionales en la medida en que puedan ser necesarios para la realización de sus actividades y en cumplimiento de sus funciones
8. Tendrá, dentro de sus funciones, la posibilidad de modificación del Acuerdo, mediante consenso entre las Partes.

**OPINION CONSULTIVA A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.**

La Comisión de Relaciones Exteriores, dada la importancia del Acuerdo sometido a su análisis, estimó conveniente contar con la opinión de la Corte de Constitucionalidad, para que este ente colegiado que



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

constituye un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, que actúa como tribunal con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la Ley de la materia, emitiera su punto de vista sobre el contenido del Acuerdo y la constitucionalidad o no de sus normas.

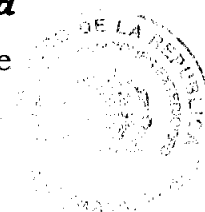
El Pleno del Congreso de la República, mediante Acuerdo Legislativo aprobado conforme la mayoría que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, dispuso formular a la Honorable Corte de Constitucionalidad, tres preguntas, las cuales al igual que las respuestas emitidas dentro de la opinión consultiva, se analizarán como parte de este dictamen, en la forma siguiente:

**PREGUNTA No. 1.**

¿Es constitucional el contenido del Acuerdo para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, suscrito por representantes del Gobierno de la República y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, el doce de diciembre del dos mil seis?

**RESPUESTA:**

“El Acuerdo celebrado entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el doce de diciembre del dos mil seis, **resulta constitucional en cuanto a la creación de una Comisión** que coadyuve





*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

con la investigación de los delitos de acción pública que en el Acuerdo de su creación se detallan, así como que brinde asesoría al Estado de Guatemala respecto de los temas que en el mismo se describen”.

**COMENTARIO DE LA COMISION.**

De esta forma la Corte de Constitucionalidad, a criterio de esta Comisión, no responde a la pregunta formulada, que se centraba en interrogar en cuanto a que si es constitucional el contenido del Acuerdo, sino que responde que el Acuerdo es constitucional en cuanto a su creación, que a simple vista es distinto de lo que fue consultado y dejó sin respuesta la primera pregunta contenida en la solicitud de opinión consultiva del Congreso.

La respuesta formulada sobre que el Acuerdo es constitucional en cuanto a su creación, ha creado mayor confusión, ya que si bien algunas personas pueden asumir que la Corte de Constitucionalidad respondió afirmativamente la primera pregunta formulada por el Congreso de la República, objetivamente sabemos que no respondió la pregunta formulada y con ello ha aumentado la duda de que el Acuerdo de creación de la CICIG, pueda violar normas constitucionales.

Este razonamiento se confirma con el agregado que la Corte de Constitucionalidad hace dentro de la respuesta a la pregunta formulada por el Congreso de la República, sobre si es constitucional el contenido del Acuerdo, cuando afirma: “Para la plena vigencia del Acuerdo es necesario que el mismo se interprete y ejecute de conformidad con la normativa



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

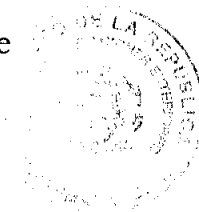
constitucional y legal vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco, por lo que los instrumentos de aprobación que emita el Congreso de la República de Guatemala y de ratificación que suscriba el Ejecutivo deberán incluir esa previsión a efecto de que se mantenga la supremacía constitucional prevista en los artículos 44, 175 y 204 de la Ley Fundamental.” ¿Debe entenderse entonces que la Corte de Constitucionalidad traslada al Congreso de la República la responsabilidad de adecuar el texto del Acuerdo de creación de la CICIG a la normativa constitucional del País? y que de igual manera el Organismo Ejecutivo, en caso de la aprobación por parte del Congreso del Acuerdo con modificaciones, ¿deberá hacer “ajustes” para la aplicación del mismo?

**PREGUNTA No. 2.**

¿Mantiene su independencia y autonomía el Ministerio Público conforme las disposiciones del Acuerdo en relación a las disposiciones de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público?

**RESPUESTA:**

“El Ministerio Público mantiene la autonomía que le otorga el Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que las disposiciones contenidas en el Acuerdo sometido a análisis de esta Corte no restringen ni disminuye las facultades que constitucional y legalmente tiene atribuidas. Asimismo, para que puedan surgir obligaciones para éste derivadas de la Comisión creada a través del Acuerdo relacionado, se



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

requiere la suscripción de Acuerdos entre éste y la referida Comisión en aras de mantener esa autonomía”.

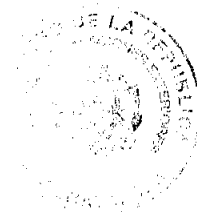
**COMENTARIO DE LA COMISION.**

Si la Corte de Constitucionalidad se manifiesta en el primer párrafo de la respuesta a la pregunta en el sentido de que “El Ministerio Público mantiene la autonomía que le otorga el Artículo 251 de la Constitución Política”, por qué refiere a continuación: “asimismo, para que puedan surgir obligaciones para éste derivadas de la Comisión creada a través del Acuerdo relacionado, se requiere la suscripción de Acuerdos entre éste y la referida Comisión ***en aras de mantener esa autonomía...***”

Puede inferirse entonces que si la Corte de Constitucionalidad se manifestó diciendo que se requiere la suscripción de Acuerdos en aras de mantener esa autonomía, es porque el Acuerdo no puede implementarse sin que se suscriban aquellos Acuerdos, porque de lo contrario sí se viola la autonomía del Ministerio Público, es decir el Acuerdo en sí mismo no tiene autonomía, ni puede implementarse por sí solo.

**PREGUNTA No. 3.**

¿Es necesaria mayoría de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, para la aprobación del Acuerdo de establecimiento de la CICIG, en virtud de las leyes que afecta o que pudiera afectar como la Ley Orgánica del Ministerio Público?



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. G.*

**RESPUESTA:**

El Convenio relacionado debe ser aprobado por el Congreso de la República mediante la mayoría absoluta del total de diputados que lo conforman, pues el mismo no encuadra dentro de los casos que requieren mayoría calificada según lo estipulado en el Artículo 172 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

**COMENTARIO DE LA COMISION**

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, no obstante la respuesta a la pregunta formulada, manifiesta dudas ya que la interpretación se hace a la luz de lo que establece el Artículo 172 de la Constitución Política de la República, dejando por un lado el análisis del contenido del artículo 171 de la misma, que se refiere a un presupuesto fundamental, cuando éstas afecten a leyes vigentes para las que la Constitución requiera la misma mayoría de votos, pero en el caso de la Ley del Ministerio Público, cualquier reforma requiere mayoría calificada, y el Acuerdo, conforme el criterio de esta Comisión, afecta la autonomía que establece el artículo 251 constitucional, al imponerle deberes al Ministerio que no aparecen taxativamente regulados en su ley orgánica.

**OTRAS CONSIDERACIONES DE LA COMISION.**

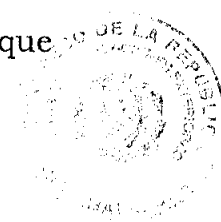
La Comisión de Relaciones Exteriores, tal como se refirió en la parte inicial del presente dictamen, recabó otras opiniones sobre el contenido del Acuerdo de creación de la CICIG, las cuales estima procedente trasladar a consideración de los Señores Diputados, para su conocimiento.



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

**OBSERVACIONES:**

1. El Acuerdo suscrito, establece conceptos que no necesariamente concuerdan con la tradición jurídica e institucional guatemalteca, al determinar por ejemplo, que existe impunidad entendiendo ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de las acciones a que se refiere, eludiendo la investigación o la condena. Cuando en realidad la tradición constitucional y legal guatemalteca, establece la responsabilidad sea esta penal o de cualquier otra naturaleza, únicamente después de seguir un procedimiento preestablecido legalmente y que un juez se haya pronunciado al respecto; será impunidad la negación de los procedimientos, pero no así necesariamente el resultado de éstos cuando se hubiere realizado conforme la Ley.
2. El tercer y cuarto considerandos establecen como premisa el reconocimiento institucional por parte del Estado de Guatemala, de la existencia dentro de su estructura, de cuerpos de seguridad clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, reconocimiento que fuera del texto del Acuerdo, institucionalmente, no se ha realizado.
3. El Acuerdo es contradictorio en su parte considerativa, ya que si bien es loable el combate de la impunidad en todos sus aspectos, el Acuerdo establece como cuestión fundamental sólo la provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, proponiendo la protección, en términos generales de la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos, en forma general, sin que



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

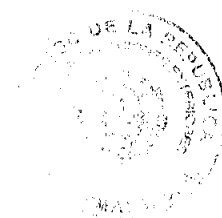
necesariamente estén vinculadas sus actividades y riesgos con la existencia en estos grupos, pues no se establece ligamen lógico en la redacción.

4. Que la creación y existencia de la Comisión se justifica, en el combate de la impunidad en términos generales, y no en forma específica, no existe congruencia entre los primeros considerandos y el penúltimo de ellos.

5. El Acuerdo es limitado en sí mismo, cuando dentro de los objetivos fundamentales, literal d) subincisos i) e ii) los relaciona únicamente como cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, cuando cometan acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. ¿Qué pasa entonces con los aparatos clandestinos de seguridad con vínculos con el crimen organizado u otras manifestaciones como la narcoactividad.?

**CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES.**

1. Dentro de las facultades de la Comisión están: promover la persecución penal (art. 3 letra b), asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal (Art. 3 letra c) solicitar al Ministerio Público la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y monitorear el cumplimiento de dichas medidas.



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

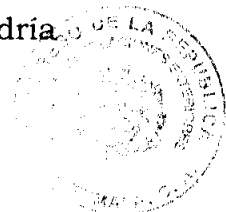
Conforme el Artículo 251 de la Ley del Ministerio Público, éste es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales **con funciones autónomas**, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del País, estableciéndose que su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.

A este respecto la Corte de Constitucionalidad, ha expresado: "...b) el (principio) **de autonomía funcional**, que implica que en el ejercicio de sus funciones no está subordinado a autoridad alguna; c) **el de legalidad**, puesto que su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica, según lo dice el mismo artículo 251 de la Constitución; y d) **el de jerarquía**, ya que su Jefe es el Fiscal General de la República, única autoridad competente para dirigir la institución..." Gaceta No. 36, expediente No. 662-94, página No. 3, sentencia: 14-06-95.

En este sentido la creación de la Comisión, incurre en el mismo error planteado en su antecedente original (CICIAS).

2. Al otorgar a la Comisión la posibilidad de promover la persecución penal, iniciar procedimientos judiciales, investigar y actuar como tercero interesado, contraviene los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso y Artículos 116 y 117 del Código Procesal Penal.

3. En la denuncia administrativa Art. 3 letra d) cuando "se hayan cometido presuntamente infracciones administrativas" no establece "qué tipo de infracciones administrativas" son, ya que necesariamente tendría



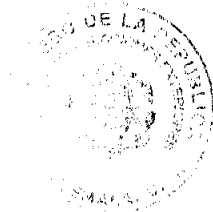
*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

que vincularlas a alguna materia específica, de lo contrario, se convertiría la Comisión, en un gendarme o vigilante de todas las actuaciones administrativas del Estado, vulnerando el principio de seguridad jurídica y los preceptos legales que establecen los mecanismos o remedios procesales y administrativos, cuando se haya que atacar una decisión violatoria a la Ley.

4. Imponer a los organismos del Estado y entidades autónomas y semiautónomas (estas últimas no existen dentro de la estructura administrativa del Estado de Guatemala); funciones y atribuciones superiores muchas veces a las que tienen los propios órganos u organismos del Estado, como el caso del Ejecutivo y Legislativo, que se ven limitados a obtener informes de las entidades autónomas o las municipalidades (que son del mismo género). **¿Cómo puede concebirse a una Comisión, solicitando informes obligatorios a la representación nacional, sin reforma constitucional o al menos legal al respecto.?**

5. Cuando el Artículo 3, letra i) establece la posibilidad de solicitar al Ministerio Público la adopción de medidas necesarias para garantizar testigos o víctimas y la posibilidad de monitorear el cumplimiento de su implementación, implica la posibilidad de exigencia, y brindar asesoría a estos entes públicos, contraviniendo los principios de autonomía que la Constitución y la ley, reconocen al MP.

6. El Artículo 4 del Acuerdo incurre, igual como se señaló anteriormente, en una indeterminación de qué procedimientos judiciales podría iniciar, sin interferir en las funciones del MP.





*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

7. El numeral 2 del Artículo 4, no determina la naturaleza de los Acuerdos que la Comisión pueda celebrar con otros Estados y qué tipo de obligaciones, responsabilidades o compromisos podrían significar al Estado de Guatemala, la naturaleza legal y la jerarquía jurídica de éstos, ya que la Comisión ha sido creada para Guatemala y sus funciones no podrían prorrogarse para o hacia otros Estados.

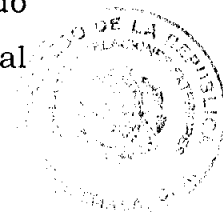
8. La literal a) del Artículo 6, en su totalidad, pudiera atentar contra la autonomía e independencia del Ministerio Público.

9. El Artículo 15, modificación del Acuerdo, establece que el mismo podrá modificarse por Acuerdo escrito entre las Partes, pero no establece si el Congreso deberá aprobar las modificaciones, sean éstas contenidas en Protocolos, Convenios o solamente cruce de cartas, que al final no se sabría si son de forma, prórroga o extensión en el tiempo o de fondo.

**OTRAS OPINIONES.**

Luego del análisis presentado a consideración del Pleno, se estima conveniente por esta Comisión, trasladar otros elementos derivados de las consultas y asesorías solicitadas por ésta, así:

Se observa que el pensamiento constitucional como disciplina aplicada al desarrollo y elaboración de sistemas de cooperación social ha tenido que considerar todo un conjunto de valores -la justicia, la libertad, la igualdad ante la Ley, el orden, la seguridad y la inviolabilidad de la propiedad privada-, cuyas implicaciones han sido objeto del más variado análisis a lo largo de los siglos. De igual



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. S.*

importancia ha sido la historia de los propios debates cívicos en torno a las estructuras institucionales y los procedimientos estimados necesarios si estos valores van a realizarse en la práctica y conciliarse entre sí.

Resulta que los valores que quisiéramos ver practicados en el ejercicio político-constitucional no se ejecutan a solas ni se alcanzan por la suerte de fuerzas inherentes. Jamás han contado con una aceptación universal, ni en la comunidad política guatemalteca ni en otras comunidades con más arraigada identificación con dichos valores. Ni son tan claras las implicaciones de estos valores en el sentido de que el curso a seguir en situaciones particulares carezca de ambigüedades. Al contrario, tales valores se han prestado con cierta frecuencia en la historia política a interpretaciones variadas, si no contradictorias.

Por ende, y dado el agudo enfrentamiento de intereses en el mundo real de post-conflicto en Guatemala, es de suma importancia la naturaleza del procedimiento a través del cual se llegan a decisiones de trascendencia y aún más cuando la naturaleza de las estructuras y los procedimientos de gobierno por medio de los cuales se toman las decisiones será crítica no sólo por las consecuencias sino para la viabilidad de la misma decisión. De allí ha habido, desde hace mucho tiempo, manifiesta preocupación con el proceso de articulación de las instituciones del sistema político.

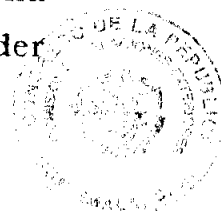


*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

Consciente de la responsabilidad que tiene por custodiar estos valores, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Guatemala se encuentra ante la obligación a emitir dictamen sobre el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG) y elevar su decisión a la Plenaria. Para orientar esta decisión, se presentan a continuación observaciones analíticas y opiniones razonadas en la vía político-constitucional y gubernamental sobre los efectos de la CICIG y la idoneidad del Acuerdo marco que lo establece. Se ofrece el análisis esperando propiciar un espíritu de cautela y con el deseo de fomentar reflexiones ponderadas sobre las posibles implicaciones, a favor y en contra, que acarreen la aprobación del Acuerdo y la instauración de esta Comisión. En estas páginas, se enmarcan las observaciones analíticas según categorías de reflexión de amplio alcance.

**EL EJERCICIO DEL PODER SOBERANO**

La soberanía, tal como se ha desarrollado el concepto desde el siglo XVI, significa el poder del Estado para tomar decisiones de última instancia, decisiones que no pueden ser anuladas o revocadas por ningún otro gobierno o institución extra estatal. Se ha discutido con el correr del tiempo sobre la ubicación de este poder



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

soberano en la comunidad política y el ejercicio del poder soberano en el régimen constitucional. Al parecer de muchos, la CICIG, como planteada en el Acuerdo con la ONU, desafía aspectos constitucionales esenciales al asumir el ejercicio de funciones públicas y al pretender el despliegue de poder dentro del territorio *dominium* del Estado de Guatemala.

En la Constitución Política de la República, el poder soberano está depositado en el pueblo, quien la delega en forma «custodial» para su ejercicio en los tres Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los cuales no hay subordinación. Es custodial la soberanía porque se trata de una delegación provisional que los pueblos constituyentes anticipan recuperar de acuerdo con el constitucionalismo moderno y las esencias democráticas del contrato social. Anterior e independiente cívicamente del Estado que emana del contrato social, la sociedad civil debe consentir en cuestiones de trascendencia, siendo la reconstitución del poder soberano un claro ejemplo de caso de consentimiento.

Todo organismo habilitado para el ejercicio del poder en Guatemala (Artículo 141 de la Constitución de 1985) está ya acordado:

El Artículo 152, del citado cuerpo legal, establece que el poder proviene del pueblo, que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la Ley y que "ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio".



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

El Artículo 153 establece que el imperio de la Ley se extiende a todos por igual, a personas físicas o jurídicas.

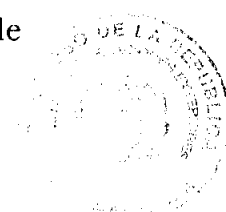
El Artículo 154 establece que la función pública no se delega sino en casos señalados por la Ley y no podrá ejercerse sin que se preste juramento de fidelidad a la Constitución.

El pueblo soberano de Guatemala deberá dar su consentimiento previo a cualquier reconstitución.

La naturaleza de la CICIG desnaturaliza tanto la estructura de los tres organismos del Estado como las funciones y competencias que les corresponden por imperativo constitucional. La operatividad que a la CICIG se le asigna en el Acuerdo de creación, somete la maquinaria de Gobierno, tanto como las voluntades de funcionarios y representantes, a obedecer criterios, procesos, estructuras y decisiones, de un cuarto poder que mina la autonomía del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio Público, entre otras agencias del Estado. Reconoce la desnaturalización la propia Corte de Constitucionalidad al emitir su opinión consultiva y exigir "la suscripción de Acuerdos entre [el MP] y la referida Comisión en aras de mantener esa autonomía.

Estipuladas en el Artículo 1 del Acuerdo se hallan algunos ejemplos de las funciones públicas de la CICIG que implican ejercicio de poder:

1. Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, forma de operar, fuentes de financiamiento y vinculación con entidades o agentes del Estado;



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. S.*

2. Colaborar en la desarticulación de aparatos clandestinos de seguridad, cuerpos ilegales y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos;
3. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas, incluyendo reformas jurídicas e institucionales.

En el caso de un País (Estado) que se auto gobierna, es decir, que no obedece órdenes del exterior y que no reconoce una ley más alta que la propia se le dice «soberano». Si el mismo País en su decisión soberana obedece esta u otra Ley o Tratado Internacional, lo hace por voluntad propia en atención a razones de prudencia o de moralidad. Sin embargo, es otra circunstancia la que un País dependa o se sienta obligado por una voluntad extra nacional o ente extranjero, y piense que todavía tenga autonomía efectiva en sus asuntos internos. Es esta la circunstancia que parece establecerse en el Artículo II del Acuerdo donde a la CICIG se le reconoce la capacidad para actuar "con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato".

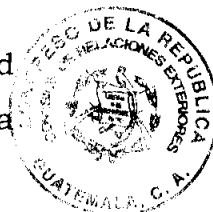
Entonces, hay no sólo un claro traslape de funciones sino eventual repetición y hasta contradicción en la ejecución de la autoridad a raíz de las tantas facultades positivas (Artículo 3 del Acuerdo) que violan el principio de la separación de poderes. Semejante poder omnímodo está implícito en la concesión de "absoluta independencia funcional". Para desempeñar su mandato la Comisión y para cumplir con sus funciones, podrá:



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

- (a) Recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados;
- (b) Promover la persecución penal y constituirse en querellante adhesivo para todos los casos en el marco de su competencia;
- (c) Denunciar a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas; en particular a aquellos presuntos responsables de obstaculizar el ejercicio de las funciones o facultades de la Comisión, sin perjuicio de promover a través del Ministerio Público cualquier proceso penal que sea pertinente;
- (d) Suscribir e implementar Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la institución del Procurador de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y cualesquiera otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de su mandato;
- (e) Solicitar a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, declaraciones, documentos, informes y colaboración en general.

Adelante, en el Artículo 4 sobre personalidad jurídica y capacidad legal de la CICIG, la independencia del Estado de Guatemala, la autonomía



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

operativa de la maquinaria gubernamental y el criterio de funcionarios y representantes nacionales, quedan condicionados a los intereses extra territoriales. Según el inciso 2, "la CICIG tendrá la facultad de concertar Acuerdos con otros Estados y Organizaciones Internacionales en la medida en que puedan ser necesarios para la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones, con arreglo al presente Acuerdo."

En tal sentido, debe observarse que, de acuerdo con el Artículo 183 de la Constitución, es el Presidente de la República el único que puede celebrar Acuerdos, Convenios o Tratados que comprometan el Estado de Guatemala. Con la instauración de la CICIG, el Ejecutivo cedería sus propias facultades y el Legislativo la aprobación que tendría que dar en materia de Tratados (Artículo 171). Pareciera que el pueblo soberano se está sometiendo a la autoridad de una entidad y de unos funcionarios que jamás eligió.

**NOVEDAD Y CADUCIDAD.**

Debe ser tema de debate sereno el dilucidar hasta dónde el sistema político y la ciudadanía guatemalteca se sentirán cómodos con un poder de esta naturaleza dada la novedad del proyecto de la CICIG en materia de relaciones y organismos internacionales. El establecer instancias de orden público cuya autoridad es de naturaleza extra territorial históricamente ha sido el resultado de situaciones de imposición en que el Estado objeto de la imposición ha colapsado o desaparecido, casos de invasión armada, derrota en guerra, ocupación militar o similar. La CICIG, en cambio, representa una total innovación; abre una nueva fase de "Gobierno Internacional" que





*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

no surge en respuesta a una crisis humanitaria, una catástrofe natural, un genocidio, un cese al fuego, una misión de paz. Tampoco se trata de un ejercicio diplomático per se. Ahora, la Secretaría General de la ONU quiere asumir una misión de administración pública mediante un aparato burocrático que pretende compartir, si no dirigir, funciones de procuraduría de justicia y de cancillería dentro del territorio nacional de un Estado Miembro.

Guatemala, al ofrecerse como campo de prueba para dicho ensayo, adquiere ante el resto de las naciones del planeta una responsabilidad especial. Se están dando precedentes de "Gobierno Internacional" que no figuran en el mandato de la ONU ni en la Convención de Viena. Otorgar inmunidad diplomática a los miembros de la CICIG, en razón de los beneficios de la Convención de Viena, presupone el ejercicio de una función diplomática, representar los intereses de algún País y no inmiscuirse en los asuntos internos del País que ha otorgado la inmunidad diplomática. La CICIG no representa en forma oficial a País alguno; ni responde a iniciativa alguna que exija el cumplimiento con una función diplomática; ni corresponde a función alguna de la ONU que no sea la atención que presta a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. El mismo Acuerdo de creación estipula que la CICIG no es un órgano de las Naciones Unidas.

En cambio, su intromisión en los asuntos internos de Guatemala es directa y explícita, una expectativa en el lenguaje del



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Acuerdo. Por un lado, el Comisionado/a será designado por el Secretario General de la ONU; será esta misma persona "el responsable general de las actividades de la CICIG, representando a la Comisión ante el Gobierno de Guatemala, ante otros Estados y Organizaciones Locales e Internacionales" (Artículo 5). Además, "el derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad requiere, en cuanto al Comisionado, la autorización del Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso del personal de la CICIG, del Comisionado" (Artículo 10). Por otro lado, "los gastos de la CICIG se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional" (Artículo 7) en *tanto* que la ONU "se reserva el derecho de terminar su cooperación con el Estado de Guatemala" (Artículo 11).

Ante la falta de definición y precisión de 'límites' que se aplicarían como frenos y contrapesos a las facultades y acciones de la CICIG y sus funcionarios, es difícil no vislumbrar en la iniciativa una clara adjudicación de poder de la Secretaría General de las Naciones Unidas, quien se proyecta como una imperiosa Presidente Mundial; y una oportunidad para ciertos países amigos de la comunidad internacional para insertarse en la procuración de justicia en Guatemala en atención a intereses que definen, desde hace tiempo, sectores febriles en sus países de origen sobre cómo deben tratarse aquí los derechos humanos.



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Saludable sería tratar el desequilibrio en el Acuerdo, empezando con la idoneidad de la ONU como la instancia de patrocinio que legitima ante los guatemaltecos y el mundo esta Comisión. Son reales y graves las violaciones a los derechos humanos; pero es de verdad cuestionable si una Comisión, una nueva legislación, un énfasis en el derecho puede resolver el problema. A la larga, la creación de una sociedad de oportunidad probablemente haría mucho más para el respeto a los derechos humanos. El punto, así de sencillo, es que la ONU no puede calificarse más que fracaso rotundo en prácticamente toda iniciativa administrativa internacional, sea en vigilancia a los derechos o en cualquier otra de las conflictivas arenas de la política internacional. ¿Será sensato hacer caso omiso de la tanta corrupción no sólo en la burocracia mediana sino en las oficinas más altas que ha traficado influencias y beneficiado de la íntima relación con la oficina del Secretario General de la ONU? ¿Cuántas veces se ha señalado en el seno del Congreso de la República irregularidad en el funcionamiento de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) aquí en Guatemala por la ausencia de mecanismos adecuados en apoyo a su fiscalización? ¿Por qué sigue en la dirección de la OIM la misma persona desde hace siete años violando todo principio de rotación de cargos que ayuda a volver transparente la administración pública internacional? ¿Dónde están los frenos y contrapesos tan necesarios para garantizar transparencia? ¿Quién custodia a los custodios?



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Es curiosa la gran disposición con que muchos guatemaltecos, sin cuestionar competencia y motivo, aceptan comprometer los asuntos soberanos al actor extra nacional bajo la premisa de que esa nueva burocracia será menos venal que la versión criolla. Aun más curiosa la preferencia por la ONU. Durante los últimos 15 años, Naciones Unidas ha participado en dos procesos de paz en Centro América uno en El Salvador, otro en Guatemala. Hay incalculable cantidad de interpretaciones, políticas, institucionales, documentales y observaciones imparciales que concluyen que el primero se califica de éxito y el segundo de fracaso. Es razonable pensar que no es la ONU el factor crítico que determina el resultado. ¿Serán las fuerzas políticas guatemaltecas entre los últimos en darse cuenta de que la ONU es cada vez más una fuerza agotada y cada vez más corrupta en materia administrativa. Si de eficiencia y efectividad se tratara en un esfuerzo por aumentar la cuota de justicia en Guatemala, ¿Por qué no acudir a otras instancias de tradición proba y con larga trayectoria en la investigación criminal, para habilitar la CICIG?

**SEGURIDAD CIUDADANA.**

Existe en Guatemala un terrible clima de inseguridad atribuible según interés e ideología a factores varios, tradiciones de violencia y conquista, cultura acívica, autoritarismo, persistencia de estados de derecho que generan expectativas de inmunidad, falta de hábitos de obediencia a la Ley, Estado fallido. El crimen organizado entendido como mafias de cierta sofisticación, en su operatividad tan nacionales como internacionales aprovecha el vacío de poder como en todas partes para



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

identificar aquellos villanos corruptibles por su deficiencia ética y compran su voluntad

Al parecer, son grupos e individuos que constituyen los "cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad", el objeto del Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. Sin embargo, en el Artículo 1, inciso 1. (d), se estipula que "para efectos del presente Acuerdo, se deberá entender por Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las siguientes características:

- (i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y
- (ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

Nadie en su sano juicio se opondría a la desarticulación de las nefastas mafias que desafían con éxito la capacidad del Estado de Guatemala para brindar la seguridad que es el derecho de la ciudadanía. Todo el mundo quisiera ver la aplicación de sanciones penales a los participantes de los delitos cometidos, pero, ¿Cómo saldrán afectados los esfuerzos por la "seguridad democrática" en la sociedad política tras establecerse semejante generalidad de mandato? Es tan amplio el concepto «cuerpo ilegal» en la definición que la cura puede ser peor que la enfermedad si la maquinaria cae en manos *ideológicas*. Con todo, el



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Ejecutivo tendría a su disposición un órgano cuyas dimensiones no se controlan.

Aparte están las cuestiones del origen de la inseguridad y su desmedida aceleración durante los últimos años en la percepción del Acuerdo y quienes lo presentan como una panacea y el ambicioso positivismo jurídico que el Acuerdo evidencia. A primera vista, el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG tendría como finalidad mejorar el sistema de justicia, reformar los códigos procesales, entrenar a mejores jueces y fiscales, mejorar la capacidad policial en las áreas de investigación y de ciencias forenses y terminar por crear un estado de seguridad capaz de enfrentar la amenaza del narcotráfico internacional y desarticular sus nexos y alianzas domésticas. Sin embargo, tal resultado es un salto de fe que podría asentar una élite política de abogados y técnicos afines por encima de los demás guatemaltecos, despertar celos si no resentimiento entre los ahora desiguales niveles de la maquinaria del Estado y terminar por crear otro eslabón del aparato burocrático

En resumen, la CICIG preceptuado en el Acuerdo de creación no llega como una iniciativa exenta de peligros:

- El traslape de funciones con instancias ministeriales del Ejecutivo (el Ministerio Público y el de Relaciones Exteriores en particular);
- La creación de un 'cogobierno' con verdadero poder



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C.A.*

paralelo dentro del Estado, consagrado a la desarticulación de otros poderes paralelos aún sin identificar;

- La falta de definición de frenos y contrapesos para circunscribir el poder facultado y fiscalizar (volver transparente) sus operaciones;
- La ausencia de mecanismos de «disputabilidad» que le permitiría al pueblo constituyente (la ciudadanía) enterarse de esta concesión soberana y dar su aval o su desaprobación.
- La posible violación de la confidencialidad y la privacidad de las personas y la inmunidad frente a daños a terceros;

La «crisis de gobernabilidad» que muchos detectan existente en la Guatemala de hoy, como en otros países que la padecen a su manera, señala la irresolución del conflicto real entre las aspiraciones democráticas de la comunidad política y las posibilidades efectivas encontradas en su organización Republicana para generar alternativas de solución, entre el respeto por las demandas, tanto objetivas como subjetivas, de la ciudadanía y la capacidad para practicar un conjunto de estrategias causales diseñadas para procurar bienes y servicios públicos susceptibles de tales demandas. Ayudaría en el esfuerzo por identificar estas alternativas de solución que los actores y estratos más relevantes de la sociedad política dejaran de confundir la república con la democracia y



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

Ley con la justicia. Los guatemaltecos tienen el derecho a trabajar el problema de la democracia representativa a su manera, errar en sus juicios, sufrir las consecuencias, y aprender de su experiencia. Significa que Guatemala tiene la libertad para definir y crear *sui generes* las alternativas de solución que soberanamente estime concordante con sus propias percepciones de interés nacional.

El 22 de marzo del año 1994, el Estado de Guatemala, con el propósito de terminar con la existencia de los llamados cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad, se comprometió en el Acuerdo Global de Derechos Humanos a combatirlos. En tal virtud el Estado asumió la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos conforme lo dispuesto en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Está el Estado de Guatemala pues, legalmente obligado a cumplir con dichos compromisos.

De ahí surge el Acuerdo para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el objeto de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y de la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el País, así como la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo la desarticulación de dichas





*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

organizaciones, así como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.

Al analizar el marco normativo del Acuerdo para la conformación de la CICIG, las incongruencias o extralimitaciones con las que contaba la CICIACS, han sido modificadas o removidas. Como ejemplo de esto podemos indicar que la facultad de la CICIG para constituirse en querellante adhesivo debe hacerse de conformidad con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales, para así no quebrantar en lo posible, el derecho constitucional de igualdad. También la libertad de acceso a lugares y archivos debe hacerse observando lo que para el efecto preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala. Las inmunidades conferidas al personal guatemalteco, atribuyéndole calidades de agentes diplomáticos y de personal internacional de las Naciones Unidas, para el caso de la CICIACS, han sido removidas en el Acuerdo de la CICIG.

Aún con estos cambios, es claro que el Acuerdo para conformar la CICIG sigue siendo un fiel reflejo del Acuerdo para la creación de la CICIACS, teniendo todavía contradicciones. El objetivo principal de la CICIG es *apoyar, fortalecer y coadyuvar* a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución legal. Esta afirmación se ve opacada, al desarrollarse el resto de la normativa, en la cual se le otorgan amplias facultades para poder investigar, desarrollar procesos paralelos al Ministerio Público y "solicitar a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

declaraciones, documentos, informes y colaboración en general, estando éstos obligados a atender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido" Artículo 3, inciso (h).

La CICIG contará con tal apoyo por parte del Gobierno de Guatemala, hasta el punto que el Fiscal General del Ministerio Público deberá nombrar los fiscales especiales que sean necesarios, con el propósito de dar cumplimiento a las finalidades de las investigaciones y persecución penal de la CICIG. En sus investigaciones y persecución penal, la CICIG también contará con unidades policiales de apoyo, que deberán ser creadas por la Policía Nacional Civil.

**OPINION DE LA COMISION:**

Luego de los puntos anteriormente expuestos y los argumentos que la Comisión se ha permitido trasladar a consideración de los señores Diputados, estima se cuenta con los elementos de juicio necesarios para emitir dictamen sobre el Acuerdo sometido a su estudio y consideración siendo éste en **SENTIDO NEGATIVO O DESFAVORABLE**, recomendando al Pleno del Congreso de la República, que una vez aprobado el mismo, el expediente se curse al archivo de este Organismo.

**SALA DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, GUATEMALA DIECIOCHO DE JULIO  
DE DOS MIL SIETE.**



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

  
**ZURY RÍOS MONTT**  
**PRESIDENTA**

**EDUARDO MEYER MALDONADO**  
**VICEPRESIDENTE**

  
**JORGE ESTUARDO GIRÓN**  
**SECRETARIO**

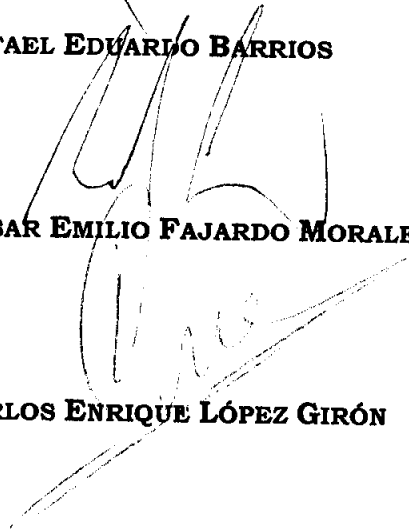
  
**EDGAR LEONEL AREVALO BARRIOS**

**RAFAEL EDUARDO BARRIOS**

  
**JUAN JOSÉ CABRERA ALONSO**

**CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES**


**OTONIEL FERNÁNDEZ ESCOBAR**

  
**CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN**

**HUGO RENÉ HEMMERLING GONZÁLEZ**

**JORGE MÉNDEZ HERBRUGER**

  
**JORGE LUÍS ORTEGA TORRES**

  
**LUÍS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ**



*Comisión de Relaciones Exteriores*  
*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*



**HÉCTOR JULIO PÉREZ ROJAS**



**JORGE ALFONSO RÍOS CASTILLO**



**MARIO ISRAEL RIVERA CABRERA**



**EWALD MAURICIO SCHEEL AGUILAR**

**OBDULIO SOLÓRZANO MONTEPEQUE**



**GUILLERMO SOSA RODRÍGUEZ**

**CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES**



**LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CERDAS**

